

PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

El SIP continúa con su ciclo de debate sobre América Latina. La quinta sesión estuvo dedicada al proceso de paz inacabado de Colombia y el sufrimiento de su población, con la participación de Mariano Aguirre, Alejandra Miller y Juan David Gómez

Texto: **Paula Figols**, miembro del SIP

MARIANO AGUIRRE «Iván Duque obstaculiza el Acuerdo de Paz en Colombia»

Estamos viviendo días de intensa violencia en Colombia. ¿Qué relación tienen estas protestas sociales y la represión policial con el conflicto armado de Colombia de los últimos 60 años?

Hay una relación directa. Las reivindicaciones de los manifestantes están vinculadas con las deficiencias profundas que tiene el Estado colombiano, como la falta de un sistema tributario eficiente y socialmente justo para distribuir la riqueza y proveer servicios universales de salud, educación, seguridad y pensiones. El Gobierno dice «no tenemos plata», pero no hace nada para frenar la evasión fiscal masiva y la corrupción, ni investiga las conexiones con el crimen organizado de parte de la élite 'legal'. Las protestas tienen también relación con la exigencia de amplios sectores de la sociedad para que se cumpla el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre las FARC y el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

¿Le ha sorprendido lo que está pasando o

se podía prever dado el descontento social acumulado?

El descontento social es una tradición en Colombia. En 2019 y principios de 2020 hubo manifestaciones masivas en diversas ciudades y en zonas rurales, que quedaron interrumpidas por la covid-19. Los gobiernos colombianos tienen una larga práctica en aguantar unas semanas de protesta, firmar un pliego de promesas, no cumplir, y el ciclo empieza otra vez. Veremos si esta vez se repite el mecanismo, o si la presión social lleva a que la élite acepte hacer reformas.

¿Qué balance hace del cumplimiento del Acuerdo de Paz cinco años después?

Pese a que es un acuerdo de Estado, aprobado por el Congreso y refirmado por la Corte Suprema, el Gobierno del presidente Iván Duque ha puesto constantes obstáculos al Acuerdo. Le ha reducido el presupuesto, lo ha retrasado y ha congelado casi totalmente dos de sus puntos centrales: la reforma del sector rural y los planes para sustituir los cultivos de coca por otros productos. Además, hace muy poco para perseguir a los



Mariano Aguirre. Profesor en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto e investigador experto en América Latina. Miembro asociado de Chatham House. Ha sido director del Centro de Investigación para la Paz de Madrid y del Centro Noruego para la Construcción de la Paz, así como asesor de la ONU en Colombia.

inductores y los asesinos de líderes sociales y exFARC, lo que agudiza el clima de inestabilidad. Los negociadores del Acuerdo lo concibieron como la puerta

de entrada para una serie de cambios y reformas en el país. No se negoció el modelo económico ni político, pero pactaron que hubiese reformas que cambiaran las estructuras injustas que dieron, en gran medida, lugar a la violencia. Pero ni el Gobierno Santos ni los facilitadores internacionales (Noruega, Cuba, la Unión Europea, Suecia y el Gobierno de Barack Obama) tuvieron en cuenta que un Gobierno de derecha (como el que vino) no lo implementaría.

¿Cuáles son las partes más y menos desarrolladas del Acuerdo?

El Gobierno de Duque quiere transformar ese marco de referencia de cambio y reformas ('la paz grande') en una paz limitada al desarme de las FARC y su implícita rendición ('la paz pequeña'), según la descripción que el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín. De todos los puntos, el que se cumplió plenamente fue la entrega de las armas que hizo las FARC. El segundo es el mecanismo de justicia transicional (tribunal denominado Justicia Especial para la Paz, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas), que el Gobierno obstaculiza constantemente. El tercero, invertir en las zonas excluidas que fueron más afectadas por décadas de guerra, algo que hace lentamente y sin dedicar los medios económicos necesarios, pese a los aportes que le hace la comunidad internacional.

JUAN DAVID GÓMEZ «Aún queda mucho para reparar las fracturas de la violencia»

Los colombianos rechazaron por un escaso margen (50,21%) el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC en el plebiscito no vinculante celebrado en 2016. ¿Ese resultado deslegitimó el acuerdo?

En parte, sí; porque fue un duro golpe moral y anímico para la otra mitad de la población que había votado sí. La victoria del no abrió una ventana de oportunidad para que el gobierno conservador de Duque, que tomó el relevo del gobierno de Santos, intentara modificar algunos puntos y, lo más grave, frenar su implementación. Y así ha ocurrido en estos dos años y medio.

Ha estudiado la evolución de la opinión pública sobre el proceso de paz entre 2016 y 2018. ¿Cómo ha cambiado?

Lo más sorprendente es el conjunto de barreras culturales, sociales y psicológicas que tiene la población para dar el paso al cambio. La mayor parte de los colombianos optan por una justicia convencional: una justicia distributiva y punitiva que exige castigo a los exguerrilleros por los delitos cometidos durante el

conflicto. Los Acuerdos de paz proponen un modelo de justicia alternativa, llamada 'restaurativa' porque antepone la verdad, la reparación y el compromiso de no repetición por encima del castigo. Buena parte de las opiniones respaldan el aislamiento forzoso de la vida pública a los excombatientes que han reconocido sus delitos. En otros contextos, como en el caso del IRA o de ETA, hay mayor tolerancia a que los presos que han pagado sus penas no sean condenados a la muerte política. Aún queda mucho trabajo pedagógico, comunitario y de reconciliación para sembrar la confianza y reparar los vínculos rotos por tanta violencia.

¿Los colombianos desconfían de los exguerrilleros?

La desconfianza es la grieta por la que se rompe una sociedad. No solo hay desconfianza hacia los exguerrilleros. Históricamente ha habido una desconfianza generalizada hacia los jóvenes de los barrios populares, los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos de las regiones más apartadas de las capitales.



Juan David Gómez. Licenciado en Sociología por la Universidad de San Buenaventura (Medellín). Doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza y profesor de Trabajo Social. Coautor del estudio 'El largo camino del perdón y la reconciliación. La opinión pública de los colombianos sobre la justicia especial para la paz'.

Lo estamos viendo con las protestas actuales.

¿Cree que es posible la reconciliación en Colombia?

Me gustaría creer que sí, pero las evidencias empíricas alimentan más el escepticismo que la esperanza. Tenemos una de las sociedades más desiguales del mundo y ese problema lleva a ver al otro como una amenaza, un riesgo potencial para los bienes y derechos propios. Es difícil la reconciliación si no somos capaces de encajar la dolorosa verdad de la violencia y de la injusticia, y si no acompañamos la paz de justicia social, económica y del reconocimiento de todos los colombianos como titulares de los derechos humanos.

Como colombiano con casi dos décadas de residencia en Zaragoza, ¿cómo ve los conflictos sociales de Colombia desde la distancia?

Lo veo con dolor, tristeza y preocupación. Creo que a los colombianos nos cuesta gestionar las discrepancias. Las democracias cuentan con mecanismos para la gestión de los conflictos, pero eso requiere una madurez cívica que aún no tenemos. Recibimos una educación que estimula la complacencia y el saber quedar bien. Cuando llega el desacuerdo, nos autorreprimimos. Y, en el siguiente paso, explotamos. Ese silencio contenido es el primer paso para la violencia. Además, si a esa educación agregamos el sesgo cultural según el cual hay ciudadanos de segunda clase, en cuanto levantan su voz, se les reprime violentamente. Estas protestas deberían servir para aprender a resolver las diferencias.